Para nosotros no es cuento, es la realidad. Nos topamos con el Juez que vende sus fallos dictando sentencias; o al policía que persigue malhechores liderando banda de maleantes; o al profesor que vende notas, que acosa a sus estudiantes "dictando" Ética/Religión/Valores. Y de tanto vivirlo se convirtieron en paisaje de nuestra vida social.

Error gravísimo del que deberíamos sacudirnos de manera inmediata y reaccionar antes de que el veneno paralizante de la indiferencia nos devore las entrañas. Ese fue el objetivo de la ONU al designar el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción.

En Colombia anualmente se roban cerca de 50 billones de pesos, siendo el delito más repetido el del cohecho, seguido del peculado y la concusión, formando el 76 % de los delitos contra la administración pública. Con estos 50 billones de pesos se podrían construir 3.571 instituciones educativas equipadas con 24 aulas cada una, o 500 nuevos hospitales con 50.000 camas, dice el diario on line kienyke.com.

Para vergüenza universal, el Congreso, el Presidente y funcionarios cercanos, y los empleados públicos son considerados como las personas más involucradas en hechos de corrupción en Colombia. Para Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 96 del ranking mundial entre 180 países. Mal. Si queremos consuelo, hay 94 países más corruptos que nosotros.

Y no es que no se tenga conciencia del daño que causa la corrupción, como lo constata el último pataleo de agosto del año pasado cuando los colombianos votamos la consulta anticorrupción, promovida por la ex senadora Claudia López con la que se pretendía castigar a los funcionarios corruptos y a quienes quieran seguir robando los recursos públicos.

Pero no se pudo, no se alcanzó el 'umbral' gracias, entre otros, a los Departamentos del Vichada, Vaupés y San Andrés que estuvieron en la cola de participación electoral. El Archipiélago con un mediocre 16,9% de participación electoral avaló la corrupción en Colombia y en el territorio.

A pesar de todo, el gobierno nacional convocó a los partidos para sacar adelante los siete temas, pero "el balance es triste y desolador" dice Juanita Goebertus, una de las promotoras.

Al final todo se queda en palabras como es lo que sucede con los Planes de Desarrollo, con la Constituciones, con nuestros juramentos, con nuestras promesas. Así somos.

Ciertamente la situación es muy delicada, y para desconsuelo, pareciera que no hay solución; pero sí la hay y todo depende de nosotros. En primera instancia la formación en el respeto a la Ley, sin atenuantes, y a la conciencia humana es el primer y fundamental paso. Desde el inicio de su vida el niño debe aprender que el respeto por el prójimo y por lo ajeno es “inamovible”, siempre y cuando la familia y la Escuela no claudiquen, como hasta ahora ha sucedido.

Una segunda instancia es la existencia de una Justicia no selectiva que sepa y pueda dar a cada quien lo que se merece, acompañada de una Justicia reparadora que por nada debe considerársele “venganza”, como nefastamente lo pregonaron los negociantes durante el gobierno anterior. Junto a ella debe estar la llamada sanción social, requisito sine qua non para evitar que el trasgresor sienta que ha obrado correctamente.

Cuánta falta hace formar en valores Éticos y Morales a toda prueba por parte de Escuela y Maestros a sus estudiantes. Claro, primero tanto la una como los otros deben retomar el camino que juraron caminar y que se conoce como “Misión Institucional”.

De no ser así, vano será todo esfuerzo y lucha por construir donde no se ha cimentado; o cosechar donde no se ha sembrado.

COLETILLA I. El panampost.com en junio de 2016 titulaba: “Santos sube salarios de congresistas colombianos: ganarán 40,5 veces el salario mínimo”, agregando que el aumento era ilegal al ser mayor al del salario mínimo. Mermelada que llamaban. Por su parte, Lidio García, presidente del Congreso (el mismo que tiene trancada la Ley Anticorrupción) propone reducir el 15% del salario de congresistas ahorrándose el país algo así como 26 mil millones anuales, con los que se podrían nombrar varios centenares de licenciados Grado A. Y si nuestros congresistas cedieran ese 15%, el Departamento podría nombrar unos 3. Esa sí sería una voz clara y fuerte para que la oyera el país.